CTSSP/015/2021

---Colima, Colima a 30 (treinta) del mes de noviembre del año 2021 (dos mil veintiuno), la suscrita C. Secretaria Ejecutiva del Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, doy cuenta a los miembros del Comité de Transparencia respecto a la **Ampliación del periodo de Reserva de Información referente al acuerdo mediante el cual se determina la Clasificación de Reserva de Información** emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con relación a la solicitud de información con número de folio 00185616, por medio del cual se solicitó al Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaria de Seguridad Pública información sobre:

> **"La cantidad de internos (presos), custodios y personal que trabaja en las cárceles desde el año 2008 hasta el 2016".**

- - -VISTO para **RESOLVER** sobre la **AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE RESERVA**, del Acuerdo de Clasificación de la Información realizada por la Secretaría de Seguridad Pública, y estando debidamente constituido el Comité de Transparencia, presidido por el Subdirector General Jurídico de la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario, el Coordinador Jurídico y de Atención Integral de la Subsecretaría de Operaciones y la Secretaria Técnica de la Secretaría de Seguridad Pública, miembros que integran el Comité, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º , 6° y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los numerales 51, 53, 54 fracción VIII, 110, 126, 129, 139 y 143, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, procede a realizar el estudio y análisis de la resolución administrativa que a continuación se presenta, y.-

A N T E C E D E N T E S

1.- Con fecha 25 (veinticinco) del mes de octubre del año 2016 (dos mil dieciséis), se realizó por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, el Acuerdo de Clasificación de Información Reservada con oficio **No. SSP/CGAJ/UT/17/2016**, signado por

el Titular de esa Secretaría CONTRALMIRANTE RET. DEM. RET. FRANCISCO JAVIER CASTAÑO SUAREZ; **a través del cual se reservó la información señalada en el preámbulo de este escrito por un periodo de cinco años**, específicamente **respecto de la información contenida en la solicitud con número de folio 00185616, realizada mediante el sistema INFOMEX y asignada a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública con fecha 17 de octubre del 2016, con el objeto de que se informe lo siguiente "La cantidad de internos (presos), custodios y personal que trabaja en las cárceles desde el año 2008 hasta el 2016",** por lo consiguiente dicha documentación fue remitida ante el Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, en esa época presidia dicho Comité el LIC. ANDRÉS GERARDO GARCÍA NORIEGA, Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado, colegialmente se resolvió por referido comité; DECLARAR PROCEDENTE CONFIRMAR LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN EN FECHA 19 (DIECINUEVE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 (DOS MIL DIECISÉIS).

R E S U L T A N D O

---Derivado a que en fecha 19 (diecinueve) de diciembre del año 2016 (dos mil dieciséis), se confirmó por parte del Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Colima sobre el acuerdo de reserva respecto de "**Cantidad de internos (presos), custodios y personal que trabaja en las cárceles desde el año 2008 hasta el 2016"**, en el entendido que dicha reserva tendría vigencia hasta el día 19 (diecinueve) de diciembre de 2021 (dos mil veintiuno), por lo que estando en tiempo y forma esté Comité resolverá sobre la Ampliación del Acuerdo de Reserva de **respecto de la información contenida en la solicitud con número de folio 00185616, realizada mediante el sistema INFOMEX y asignada a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública con fecha 17 de octubre del 2016, con el objeto de que se informe lo siguiente "Cantidad de internos (presos), custodios y personal que trabaja en las cárceles desde el año 2008 hasta el 2016",** emitido por la Secretaría de Seguridad Pública.

C O N S I D E R A N D O S

1. **COMPETENCIA.** Este Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública es el órgano colegiado competente para solicitar la **Ampliación del Periodo de Reserva de la Información** con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 6° y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 1° fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los numerales 51, 53, 54, 110, 126, 129, 143, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

El Comité de Transparencia se encuentra integrado por tres miembros que serán el Subdirector General Jurídico de la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario, la Secretaria Técnica de la Secretaría de Seguridad Pública y el Coordinador Jurídico y de Atención Integral de la Subsecretaría de Operaciones.

El Comité sesionará con la asistencia de la mayoría de sus integrantes y aprobará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el Subdirector General Jurídico de la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario o quien presida el Comité en su ausencia, tendrá voto de calidad.

Los miembros del Comité podrán ejercer sus funciones de manera directa o bien por conducto de los servidores públicos adscritos a su dependencia que al efecto designen corno sus representantes.

2.- ANÁLISIS DE LA AMPLIACIÓN DE RESERVA DE LA INFORMACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.

"Del análisis se advierte que con fecha 25 (veinticinco) de octubre de 2016 (dos mil dieciséis) se emitió el Acuerdo de Clasificación de Información Reservada, con fundamento en el artículo 106, 110, 111 y 116 fracciones I, II y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, así como el artículo 110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en relación con los artículos 2 y 71 de la Ley del Sistema ~~Estatal~~ de Seguridad Pública del Estado de Colima que estuvo en vigor en esa época, señalando que con el objeto de evitar poner en riesgo la cantidad de internos (presos) custodios y personal que trabaja en las cárceles desde el año 2008 hasta ei 2016, es imperante emitir con el carácter de reservada la información que esté vinculada al rubro de Seguridad.

Dicha clasificación de información se prevé específicamente en lo relacionado con la cantidad de internos (presos), custodios y personal que trabaja en las cárceles desde el año 2008 hasta el 2016; cuya divulgación puede vulnerar o poner en riesgo la seguridad pública, por lo que con la finalidad de salvaguardar la integridad física de los mismos, es por lo que se procedió a reservar la información relacionada con la cantidad de internos (presos), custodios y personal que trabaja en las cárceles desde el año 2008 hasta el 2016.

Por su parte la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su artículo 110 párrafo tercero señala que se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una de las bases de datos del Sistema, así como los Registros Nacionales y la Información contenida en ellos, en materia de detenciones, información criminal, personal de Seguridad Pública, personal de equipo de los servicios de seguridad privada, , armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada, sentenciados y las demás necesarias para la operación del Sistema, cuya consulta es exclusiva de las Instituciones de Seguridad Pública que estén facultadas en cada caso, a través de los servidores públicos que cada institución designe, por lo que el público no tendrá acceso a la información que en ellos se contenga; asimismo, el artículo 71 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Colima (vigente en ese entonces) dispone que toda información para la seguridad pública generada o en poder de Instituciones Policiales se considera reservada, debiendo registrarse, clasificarse y tratarse de conformidad con la mencionada Ley y demás disposiciones aplicables.

Además, la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima contemplaba en su artículo 2, que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, del Estado y de sus municipios, teniendo como fines, entre otros, salvaguardar la integridad, derechos y bienes de su habitantes, asegurar el pleno goce de las garantías individuales y sociales así como preservar las libertades, el orden y la paz pública.

La valoración atribuida como interés público a los fines que persigue la información pública, y que esta Dependencia debe garantizar, implica un compromiso de orden prioritario, toda vez que su difusión generaría un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo.

Advirtiendo la aplicación de la prueba de daño sería mayor que las ventajas de su difusión pues la reserva de la información pretende impedir que grupos delictivos, la delincuencia organizada, o cualquier individuo con intenciones nocivas, conozca la cantidad de internos (presos), custodios, y personal que trabaja en las cárceles desde el año 2008 hasta el 2016, emitido por la Secretaría de Seguridad Pública, poniendo en riesgo las estrategias seguridad implementadas en el Estado.

El plazo de reserva de la información ***será por un periodo de cinco años****.*

La autoridad responsable de la custodia y conservación de la información que se reserva, será la Secretaría de Seguridad Pública del Estado".

El análisis de la Secretaría de Seguridad Pública que a su juicio determina la **prueba de daño probable que puede tener, "cuya divulgación puede vulnerar o poner en riesgo la seguridad pública o salud de las personas mencionadas en la solicitud de información, es por lo que el Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, con fecha 19 (diecinueve) de diciembre de 2016 (dos mil dieciséis),procedió a reservar la información relacionada con la "cantidad de internos (presos), custodios y personal que trabaja en las cárceles desde el año 2008 hasta el 2016".**

3.-ANÁLISIS DE LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DE ESTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

Del estudio y análisis del asunto en cuestión, se desprende la **Ampliación que la Clasificación de Reserva de la Información** emitida por la Secretaría de Seguridad Pública consistente en "**la cantidad de internos (presos), custodios y personal que trabaja en las cárceles desde el año 2008 hasta el 2016".**

En este sentido, cabe destacar que este Comité es un ente garante del derecho constitucional de acceso a la información, sin embargo no debe perderse de vista que de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 106, 110, 114 y 116 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, el derecho constitucional de acceso a la información pública puede ser restringido cuando se trate de información clasificada, por razón de seguridad pública, ponga

en riesgo la vida, la seguridad, cause perjuicio a las actividades de prevención del delito, procuración y administración de justicia, o bien el daño que pueda producirse con la publicación de la información sea mayor que el interés público de conocerla.

Luego entonces, en nuestra Carta Magna, se establece que el derecho de acceso a la información no es absoluto y encuentra sus límites en virtud del interés público, la vida privada y el derecho a la protección de la vida, misma limitación que debe vincularse con la realización de una prueba de daño, por lo que este Comité coincide con el sujeto obligado con la aplicación al caso en concreto de la siguiente tesis que se transcribe al tenor literal siguiente:

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 2000234
Instancia: Primera Sala
Décima Época
Materias(s): Constitucional
Tesis: 1a. VIII/2012 (10a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, página 656
Tipo: Aislada

INFORMACIÓN RESERVADA. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL).

Las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la protección del interés público, los artículos 13 y 14 de la ley establecieron como criterio de clasificación el de información reservada. El primero de los artículos citados establece un catálogo genérico de lineamientos bajo los cuales deberá reservarse la información, lo cual procederá cuando la difusión de la información pueda: 1) comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional; 2) menoscabar negociaciones o relaciones internacionales; 3) dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país; 4) poner en riesgo la vida, seguridad o salud de alguna persona; o 5) causar perjuicio al cumplimiento de las leyes, prevención o verificación de delitos, impartición de justicia, recaudación de contribuciones, control migratorio o a las estrategias procesales en procedimientos jurisdiccionales, mientras las resoluciones no causen estado. Por otro lado, con un enfoque más preciso que descriptivo, el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental contiene un catálogo ya no genérico, sino específico, de supuestos

en los cuales la información también se considerará reservada: 1) la que expresamente se clasifique como confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental reservada; 2) secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otros; 3) averiguaciones previas; 4) expedientes jurisdiccionales que no hayan causado estado; 5) procedimientos de responsabilidad administrativa sin resolución definitiva; o 6) la que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista de servidores públicos y que formen parte de un proceso deliberativo en el cual aún no se hubiese adoptado una decisión definitiva. Como evidencia el listado anterior, la ley enunció en su artículo 14 supuestos que, si bien pueden clasificarse dentro de los lineamientos genéricos establecidos en el artículo 13, el legislador quiso destacar de modo que no se presentasen dudas respecto a la necesidad de considerarlos como información reservada.

Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, A.C. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

Aunado a lo anterior, se desprende que la determinación de reserva de información emitida por la Secretaría de Seguridad Pública se ajusta a lo señalado por el artículo 112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, toda vez, que el acuerdo adoptado por la citada Secretaría se ajusta a la causales de reserva contempladas en el artículo 11 y en las fracciones I, II, IV, IX y XI del artículo 116, todos de la citada Ley.

En este sentido, la citada reserva de Información se encuentra debidamente fundada y motivada, citándose al efecto las disposiciones jurídicas aplicables de la Ley de Transparencia que autorizan el principio de excepción a la divulgación de la información solicitada, encuadrándose al efecto las normas con los hechos, circunstancias y motivos del caso concreto; consecuentemente, se demuestra que la información encuadra en las hipótesis de reserva previstas en la ley, concretamente en la contenida por las fracciones I, II, IV, IX y XI del artículo 116 de la ley de la materia; y se determina a través de la prueba de daño del perjuicio que puede producirse con la liberación de la información, toda vez que se pone en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física y obstruye la prevención o persecución de los delitos, puesto que se trata de información del ámbito de la seguridad pública, y de entregarse se puede poner en riesgo la seguridad pública así como la vida, seguridad o su salud, de los elementos policiales, máxime que dicha información se encuentra reservada por disposición expresa de una ley, sin que ello contravenga los principios y disposiciones establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, así como las previstas en tratados internacionales.

Al efecto, las fracciones I, II, IV, IX y XI, del artículo 116 de la Ley de Transparencia referida establecen:

> *"Artículo 116.- Los titulares de las áreas de los sujetos obligados podrán emitir lineamientos para clasificar como reservada información que se encuentre a su disposición con motivo del ejercicio de su cargo, o podrán ejercer dicha función por medio de las instancias que se determinen en los reglamentos o acuerdos administrativos que dicten.*
>
> *En todo caso, el acuerdo correspondiente deberá fundar y motivar la reserva, a través de la aplicación de la prueba de daño a que se refiere el artículo 111 de esta ley, cuando la publicación de la información actualice cualquiera de los siguientes supuestos:*
>
> *I.- Comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;*
> *II.- Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;*
> *IV. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;*
> *IX. Se refiera a servidores públicos que laboren o hayan laborado en el ámbito de la seguridad pública, procuración e impartición de justicia, que por su publicación pudiera poner en peligro su vida, la de otros servidores públicos o de terceros;*
> *XI. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan, así como las previstas en tratados internacionales."*

En ese sentido este Comité de Transparencia coincide con el Acuerdo de Clasificación de Reserva realizado por la Secretaría de Seguridad Pública, mismo que se encuentra ajustado a derecho, pues en la especie se actualizan los supuestos de clasificación antes transcritos, puesto que se pretende proteger el interés público de la procuración preventiva de la seguridad a favor de los ciudadanos en general, estableciendo con ella una protección especial a bienes o agrupaciones, estableciendo una limitación temporal, legal, fundada y motivada a los derechos de los particulares, en éste caso a conocer, datos específicos que, en manos de unos cuantos, siendo éstos, probable y previsiblemente grupos delincuenciales, pondrían en peligro la estabilidad de las estructuras administrativas y operativas de la Institución de Seguridad Pública.

Para analizar el caso en concreto, es necesario establecer el concepto de Seguridad Pública, para lo cual podemos señalar, que por ésta se entiende, que es la cualidad de los espacios públicos y privados, que se caracteriza por la inexistencia de amenazas que socaven o supriman los bienes y derechos de las personas y en la que existen condiciones propicias para la convivencia pacífica y el desarrollo individual y colectivo de la sociedad.

De lo anterior resulta útil resaltar dos principales valores esgrimidos por el Maestro José Antonio González Fernández en su libro "La Seguridad Pública en México".

a) La vida y la integridad de las personas. "La vida es el valor supremo de todo ser humano y, por tanto, el primero y principal valor que debe ser objeto de una adecuada protección jurídica y material por parte del Estado. Además, para que los individuos tengan la posibilidad de desarrollar sus potencialidades dentro del conglomerado social es imprescindible una especial protección a su integridad física.(sic}

b) El orden y la paz públicos. El orden público es el sustento de la cohesión social que motiva la existencia del Estado, de ahí que su preservación sea requisito esencial para la conservación y desarrollo de las libertades y derechos del individuo como ser social. Puede afirmarse que la función de seguridad pública en su tutela del orden y paz públicos tiene como objetivo principal la conservación del Estado de Derecho. (sic)

Como se puede advertir, la Seguridad Pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad. Un Estado de Derecho genera condiciones que permiten al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados están exentos de todo peligro, daño o riesgo.

En consecuencia se acredita que de divulgarse la información generaría un daño presente, probable y específico de perjuicio significativo para el interés público, además de que el riesgo de entregar la información es mayor que las ventajas de su difusión, ya que el derecho a la vida es un derecho *sine qua non* para la existencia de otros derechos; si bien es cierto, el derecho de acceso a la información se constituye como un derecho humano inherente a todo individuo, también lo es que no es un derecho absoluto como ya se expuso en supra líneas, sino que se encuentra sometido a un régimen reducido de excepciones, para el caso, de que su ejercicio amenace valores o bienes jurídicos protegidos por el derecho, a saber son:

CAUSAS DE INTERÉS PÚBLICO: Cuando la divulgación de cierta información ponga en riesgo de manera indudable e inmediata el adecuado funcionamiento de las instituciones públicas, así como vulnere el adecuado cumplimiento a los ordenamientos jurídicos vigentes.

Es por lo anterior que no resulta ser excesivo el señalar que, entre las probables personas que pudieran llegar a tener acceso a la información que se pretende reservar, de ser divulgada, se encuentra el crimen organizado y demás interesados que pretenden modificar, alterar o atemorizar a las instituciones encargadas de la seguridad pública, infundiendo miedo en el personal operativo y administrativo de dicha dependencia, aunado al problema latente de la contra inteligencia que dañaría los intereses del Estado en su conjunto.

En ese orden de ideas, resulta aplicable al caso concreto lo previsto por los artículos 40, 110 y 115 párrafo segundo, todos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mismos que se transcriben en la parte que interesan y son del tenor literal siguiente:

> ***Artículo 40.-*** *Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones:*
>
> ***Fracción XXI.*** *Abstenerse, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer por cualquier medio a quien no tenga derecho, documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra información reservada o confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con motivo de su empleo, cargo o comisión;*
>
> ***Artículo 110.-*** *Los integrantes del Sistema están obligados a compartir la información sobre Seguridad Pública que obre en sus bases de datos, con las del Centro Nacional de Información, en los términos de las disposiciones normativas aplicables.*
> *La información contenida en las bases de datos del sistema nacional de información sobre seguridad pública, podrá ser certificada por la autoridad respectiva y tendrá el valor probatorio que las disposiciones legales determinen.*
> *Se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una de las Bases de Datos del Sistema, así como los Registros Nacionales y la información contenida en ellos, en materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, personal y equipo de los servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada, sentenciados y las demás necesarias para la operación del Sistema, cuya consulta es exclusiva de las Instituciones de Seguridad Pública que estén facultadas en cada caso, a través de los servidores públicos que cada Institución designe, por lo que el público no tendrá acceso a la información que en ellos se contenga.*
>
> ***Artículo 115 párrafo segundo.-*** *La información capturada en el Registro Administrativo de Detenciones será confidencial y reservada. A la información contenida en el registro sólo podrán tener acceso:*
>
> *Bajo ninguna circunstancia se podrá proporcionar información contenida en el Registro a terceros. El Registro no podrá ser utilizado como base de discriminación, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad u honra de persona alguna.*

Bajo esa tesitura, resulta pertinente también traer a colación lo previsto en los artículos 106, numerales 54 y 5, 57 apartado 1, fracción XXVII y apartado

2, fracción XXXIII, así como en el diverso numeral 106 puntos 4 y 5 fracciones II, III y IV de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima, los cuales refieren que dentro de las obligaciones y conductas prohibidas por los integrantes de las Instituciones Policiales, se encuentran las de dar a conocer información considerada como reservada; artículos anteriores que se transcriben para pronta referencia y señalan:

> "**Artículo 57, apartado 1, fracción XXVII**.- Abstenerse, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer por cualquier medio, a quien no tenga derecho, documentos, registros, imágenes, constancias, estadística reportes o cualquier otra información reservada o confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con motivo de su empleo, cargo o comisión.
>
> **Artículo 57, apartado 2, fracción XXXIII.** - Revelar asuntos secretos o información reservada de los que tenga conocimiento en razón de su empleo, encargo o comisión;
>
> **Artículo 106,** apartado 4**.-** Toda información para la seguridad pública generada o en poder de Instituciones Policiales, órganos desconcentrados y descentralizados se considera reservada, debiendo registrarse, clasificarse y tratarse de conformidad con la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

5.- Para efectos de la presente Ley se considera información reservada, sin necesidad de emitir el acuerdo respectivo, la siguiente:

> I. ***La clasificada con este carácter por la Ley General, la presente Ley*** *y demás disposiciones aplicables;*
>
> II. ***Aquella cuya divulgación implique la revelación de procedimientos, métodos fuentes, especificaciones técnicas, sistemas, tecnología*** *o* ***equipos útiles para la generación de inteligencia en materia de seguridad pública*** *o* ***el combate a la delincuencia, así*** *como* ***la integración de los resultados de las evaluaciones de*** *control* ***y confianza;***
>
> III. *Aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o potenciar una amenaza a la seguridad pública o* ***a las*** *instituciones del Estado; la que sea producto de una* ***intervención de comunicaciones privadas autorizadas conforme a la Constitución y las disposiciones legales correspondientes."***

Derivado de lo anterior resulta evidente, que es disposición de orden federal y estatal abstenerse de publicar información referente a dar a conocer el número de vehículos, así como el año y modelo de todas las unidades con las que cuenta la Secretaría de Seguridad.

Así mismo, la reserva de la información antes descrita encuadra en las causales de interés público, toda vez que con su divulgación, se estaría contraviniendo lo

dispuesto por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Colima, al tratarse de información reservada por los propios ordenamientos descritos, poniendo en riesgo la vida e integridad física de los servidores públicos tendientes a garantizar la seguridad pública en el Estado, con motivo de sus funciones.

Por lo tanto, es necesario limitar la publicación de la información que nos ocupa, debido que su difusión facilitaría a células delictivas el neutralizar las acciones, implementadas o por implementar, en materia de seguridad pública para la preservación del orden y la paz pública, ya que de proporcionar dicha información, es evidentemente se revelaría el estado de fuerza con la que cuenta el Sujeto Obligado para hacer frente a la delincuencia y en ese caso serviría de referencia para que células delictivas conozcan el poder de respuesta del Sujeto Obligado y su capacidad de resistencia.

Así las cosas, el dar a conocer el número de Personal operativo de seguridad pública comisionado para brindar seguridad a los servidores públicos, ex servidores públicos, sus familias y sus viudas, vulneraría con ello su capacidad para preservar y resguardar la vida o salud de las persona sus estrategias para combatir las acciones delictivas de la delincuencia organizada y sus capacidades para evitar la comisión de delitos afectando la paz y el orden público. **En razón de ello, proporcionar información relacionada con la seguridad pública, provocaría un grave daño, toda vez que su divulgación se traduciría en un insumo de utilidad para los grupos delictivos que permitiría perpetuar diversos ataques, configurándose un daño presente, probable y específico** como a continuación se señala:

DAÑO PRESENTE: Es importante resaltar que la cantidad de internos (presos) custodios y personal que trabaja en las cárceles desde el año 2008 hasta el 2016, se ha colocado en primera instancia por parte de la delincuencia organizada, como uno de los aspectos más importantes a considerar, ya que dar a conocer dicha información, en particular la referente a los custodios y del personal que labora en cárceles del Estado y que dependen de la Secretaría de Seguridad Pública , ejercen funciones de alto riesgo relacionadas con la seguridad pública en aspectos tales como la planeación, evaluación y ejecución de programas para el ataque frontal contra la delincuencia, directrices, metodología y modelos así como la instrumentación de

acciones estratégicas, además que ello permitiría el conocimiento por parte de terceros, respecto a la estructura, disposición física de los elementos y armamento de seguridad, tomando como premisa que esta información pudiera ser de vital importancia para grupos o personas relacionadas con la delincuencia.

DAÑO PROBABLE: Dar acceso a la información solicitada consistente en "Cuántos internos (presos), custodios y personal que trabaje en las cárceles, por año, de 2008 a 2016?, se pondría en manifiesto las características de seguridad con las que cuentan reclusorios del Estado; así como la vida e integridad física de las personas que se encuentran en su interior y los funcionarios que ahí laboran; con esto tendrían pleno conocimiento en la forma en la que operan los Centros de Reclusión y podrían elaborar una estrategia para lograr la ejecución de algún hecho delictivo de alto impacto.

DAÑO ESPECÍFICO: Se considera que proporcionar la información se vulnera la seguridad pública de las distintas instituciones que conforman el Sistema Penitenciario del Estado, en virtud de que la divulgación del número de elementos de seguridad, custodia y personal administrativo que labora en las mismas, con ello ocasionaría que las células delictivas cuenten con información valiosa que coloca en grave riesgo la seguridad y la vida de las personas tendientes a garantizar la seguridad en el Estado, así como poner en riesgo la Seguridad pública.

En este tenor, es claro que la Secretaría de Seguridad Pública, cumplió con lo dispuesto en los artículos 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, los cuales disponen que los sujetos obligados dispondrán lo necesario a efecto de que los documentos que contengan información reservada sean debidamente custodiados y conservados, procediendo a realizar el acuerdo de reserva correspondiente debiendo estar debidamente fundado y motivado, acreditando a través de la aplicación de la prueba de daño la justificación que de divulgarse la información se genera un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo para el interés público.

Se señala lo anterior, en virtud de que como quedo bien establecido, la Seguridad Pública es de interés general, entonces el concepto de interés público puede ser utilizado como restrictivo de diversos derechos ya que el interés público es aquello que es relevante para la mayoría en una comunidad específica, en un tiempo económico, político y social determinado, y, por tanto, es susceptible de ser tutelado por el Estado.

Se deja en evidencia que este Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública coincide en lo general y en lo particular con el entonces Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, quien en su momento declaro procedente confirmar la clasificación de reserva de la información relacionada con **la cantidad de internos (presos), custodios y personal que trabaja en las cárceles desde el año 2008 hasta 2016** realizada por la Secretaría de Seguridad Pública.

Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 28, 29, 51, 52, 53, 54, 57, 110, 112, 116, 128 y 129, de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, este Comité de Transparencia procede a los:

R E S O L U T I V O S

PRIMERO. - Este Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima es el Órgano Colegiado competente para conocer de la presente clasificación de información, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 6° y 16 de la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos artículo 1º fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los numerales 51, 53, 54, 110 y 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima. - - -

SEGUNDO. - Este Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima **PROCEDE A AMPLIAR EL PERIODO DE RESERVA POR CINCO AÑOS ADICIONALES** de la información relacionada con **la cantidad de internos (presos), custodios y personal que trabaja en las cárceles desde el año 2008 hasta el 2016,** realizado por la Secretaría de Seguridad Pública en fecha 25 (veinticinco) de octubre del año 2016 (dos mil dieciséis) y que fue confirmado por el Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Colima en fecha 19 (diecinueve) de diciembre del año 2016 (dos mil dieciséis), de conformidad con el artículo 110 párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, en el entendido que dicho término comenzará a computarse a partir del día (20) de diciembre del año 2021 (dos mil veintiuno). - - -

TERCERO. - Notifíquese la presente resolución a la dependencia o Unidades Administrativas correspondientes, por conducta de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Seguridad Pública, para los efectos a los que haya lugar. - - -

- - - Así lo resolvió y firman el Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima, por unanimidad de votos de su Presidente, **LIC. FRANCISCO JAVIER DELGADO BETANCOURT**, Subdirector General Jurídico de la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario, **LICDA. EMERITH CATALINA GRANADOS HERNÁNDEZ**, Secretaria Técnica de la Secretaría de Seguridad Pública y Miembro del Comité de Transparencia, y **LIC. JOSÉ RODRIGO SALAZAR AMEZCUA,** Coordinador Jurídico y Atención Integral de la Subsecretaría de Operaciones y Miembro del Comité de Transparencia, ante este comité.

- - - **MTRA. MARIA ELIZABETH LOPEZ GARCÍA,** Secretaria Ejecutiva del Comité de Transparencia de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Colima, quien autoriza y da fe.- - -

EL TEMPLE DEL BRAZO ES
VIGOR EN LA TIERRA

LIC. FRANCISCO JAVIER DELGADO BETANCOURT
Subdirector General Jurídico de la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario y Presidente del Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima

LICDA. EMERITH CATALINA GRANADOS HERNÁNDEZ
Secretaria Técnica de la Secretaría de Seguridad Pública y miembro del Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima

LIC. JOSÉ RODRIGO SALAZAR AMEZCUA
Coordinador Jurídico y de Atención Integral de la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima y miembro del Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública

MTRA. MARÍA ELIZABETH LÓPEZ GARCÍA
Secretaria Ejecutiva del Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima

La presente hoja de firmas corresponde al Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública No. **CTSPP/015/2021**.